



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

### CERTIFICA

Que en la Sesión nº 20/06 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 1 de junio de 2006, se ha adoptado el siguiente

### ACUERDO

Por el que se aprueba la:

#### **CONTESTACIÓN A LA CONSULTA FORMULADA POR CABINAS TELEFÓNICAS DEL SUR, S.L. EN RELACIÓN A DISTINTAS CUESTIONES SOBRE LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CABINAS TELEFÓNICAS EN VÍA PÚBLICA.**

#### **I. ANTECEDENTES.**

**Primero.-** Con fecha 16 de enero de 2006, ha tenido entrada en el Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la consulta presentada por la entidad CABINAS TELEFÓNICAS DEL SUR, S.L. (en adelante, CABISUR), por la cual se manifiesta la existencia de problemas en algunos Ayuntamientos, en relación a la renovación del acuerdo que tienen con TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. sobre la instalación y explotación de las cabinas telefónicas.

En su escrito se exponen las siguientes cuestiones:

1. *“¿Pueden los Ayuntamientos renovar los acuerdos que tienen firmados con Telefónica desde antes que entrara la nueva Ley de telecomunicaciones, y firmar el nuevo acuerdo con CABITEL? o ¿deben sacar a concurso la instalación de las cabinas?”*
2. *“La ampliación de instalación de cabinas en cualquier Ayuntamiento, ¿deben sacarlo a concurso?”*



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

3. *“Nosotros como empresa ¿podemos dirigirlos a los Ayuntamientos para que éstos nos informen cuándo termina el acuerdo con Telefónica o con cualquier empresa? Si es afirmativo, basándonos en qué ley.”*

## II. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante, LGTel), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (en adelante, CMT) tiene por objeto *“el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de los conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre los mismos”*. Para el cumplimiento de este objeto, la Ley atribuye a esta Comisión determinadas funciones, además de cualesquiera otras que legal o reglamentariamente se le atribuyan o le encomienden el Gobierno o el Ministerio de Industria.

Concretamente, el artículo 29.2, letra a), del Reglamento de la CMT, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, establece que es función de esta Comisión *“la resolución de las consultas que puedan formularle los operadores de redes y servicios de telecomunicación y las asociaciones de consumidores y usuarios de estos servicios”*.

Con carácter general, y conforme a lo señalado por esta Comisión en distintos acuerdos contestando consultas que le han sido planteadas, ha de entenderse que las consultas a las que se refiere el artículo 29.2 a) del Reglamento de la CMT pueden referirse a los siguientes ámbitos:

- Las normas que han de ser aplicadas por la Comisión;
- Los actos y disposiciones dictados por la Comisión;
- Y las situaciones y relaciones jurídicas sobre las cuales ha de ejercer sus competencias la Comisión.

## III. OBJETO DE LA CONSULTA

La consulta planteada se refiere a las autorizaciones de ocupación del dominio público, que los Ayuntamientos otorgaron a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U (en adelante, TESAU), para la instalación/explotación de terminales de uso



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

público en vía pública, y su posterior renovación de las mismas a través de la entidad TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS (en adelante, TTP), así como el modo en que los Ayuntamientos pueden ampliar los emplazamientos de terminales de uso público en vía pública.

Por otra parte, se plantea también la posibilidad de CABISUR, como empresa, de solicitar información ante las Administraciones locales, en relación a la duración de los acuerdos firmados para la explotación/instalación de terminales de uso público, así como su regulación legal.

### III. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES DE USO PÚBLICO SITOS EN EL DOMINIO PÚBLICO.

Durante la vigencia de la anterior Ley 11/1998, de 24 de abril, General de las Telecomunicaciones (en adelante, Ley 11/1998), y su normativa de desarrollo, la ocupación del dominio público, materia ésta directamente vinculada con la instalación y/o explotación de cabinas en dominio público, se regulaba de modo diferente según el tipo de licencia del que fueran titulares los operadores.

Así, el artículo 44 de la Ley 11/1998 (titulado “*Derecho de ocupación del dominio público*”), preveía en su apartado 1, que los titulares de licencias individuales para el establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones (esto es operadores con licencia tipo B o C) a los que se refiere el artículo anterior, tendrán derecho a la ocupación del dominio público, en la medida que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de telecomunicaciones de que se trate.

Este derecho se ejercitaba, según lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollaba el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de las telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones (en adelante, Reglamento del Servicio Universal), mediante una solicitud de ocupación concreta de bienes que el operador dirigía a la Administración titular del dominio.

*“1. Los titulares de licencias individuales para el establecimiento y explotación de redes públicas de comunicaciones que, de conformidad con los artículos anteriores, tengan reconocido genéricamente el derecho de ocupación del dominio público y hayan asumido el cumplimiento de las correspondientes obligaciones de servicio público,*



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*podrán solicitar la ocupación concreta de determinados bienes de la Administración titular de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de las Telecomunicaciones y en la normativa vigente en materia de ocupación del dominio público.*

Es decir, las disposiciones referidas, preveían un título singular de ocupación, la autorización de uso, al que se aplicaría la legislación de régimen local, conforme establecía el artículo 45 de la Ley 11/1998:

*“En las autorizaciones de uso público local será de aplicación, además de lo previsto en el artículo anterior, lo siguiente:*

- a) Las autorizaciones de uso deberían otorgarse conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen local.*

*(...)”*

En este mismo sentido, la Orden, de 22 de septiembre de 1998, por la que se establece el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titulares (en adelante, Orden de Licencias), en su artículo 26.4 reconocía expresamente, a los titulares de licencias tipo B, además del derecho a ocupar, para el establecimiento o explotación de redes públicas, propiedad pública o privada, un derecho a instalar terminales de uso público, situados en dominio público, que permitan su uso común.

Por el contrario, a los operadores con licencias tipo A, las cuales habilitaban a su titular para la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público, sin asumir para ello derechos y obligaciones en relación al establecimiento o explotación de una red, la Orden de Licencias, únicamente les reconocía la posibilidad de instalar terminales de uso públicos, situados en dominio público, mediante su uso común, previo acuerdo con la Administración titular de éste.

Por ello, a diferencia de titulares de licencias tipo B, a los operadores con licencias tipo A, así como a aquellas personas o entidades dedicadas sin más a la instalación o explotación de cabinas en vía pública sin necesidad de contar con licencia específica, de conformidad con la legislación de telecomunicaciones, ante la ausencia de reconocimiento genérico de ocupación del dominio público, se les aplicaba el régimen general de acceso mediante concesiones administrativas.

Con la actual LGTel, se avanza en la liberalización de las Telecomunicaciones electrónicas haciendo desaparecer las figuras de las autorizaciones y licencias previstas en la Ley 11/1998, y sustituyendo dichos títulos habilitantes por una notificación de servicios prestados y posterior inscripción de los mismos, de



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

acuerdo con lo previsto en los artículos 6.2 de la LGTel y artículo 5 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, al servicio universal y la protección de los usuarios (en adelante, Reglamento de Servicio Universal).

Como consecuencia de ello, el reconocimiento del derecho de ocupación del dominio público, ya no viene vinculado a una determinada categoría de licencia.

Por otra parte, la actual LGTel no prevé el reconocimiento, ni explícito ni implícito, de un derecho de ocupación del dominio público con el fin de instalar terminales de uso público, mediante su uso común, a los operadores dedicados a la explotación de una red de comunicaciones electrónicas, sino que únicamente, de acuerdo con el artículo 26 de la LGTel y 57 del Reglamento del Servicio Universal, el derecho de ocupación del dominio público sólo se reconocerá a los operadores en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que de trate.

Por tanto, a diferencia de la Orden de Licencias, la cual fue derogada por el vigente Reglamento Universal, tal y como establece en su Disposición derogatoria única, con la actual legislación de telecomunicaciones desaparece el reconocimiento del derecho a ocupar el dominio público con la finalidad de instalar cabinas telefónicas, a los operadores dedicados al establecimiento de una red.

Como consecuencia, cualquier operador, explote o no una red pública de comunicaciones electrónicas, así como otros agentes, que sin ser operadores, tienen como actividad la instalación o explotación de cabinas en vía pública, al carecer, todos ellos, del reconocimiento de derecho de ocupación del dominio público para la instalación de terminales de uso público, han de solicitar a las correspondientes Administraciones Públicas el título habilitante para tal ocupación, siéndoles de aplicación el régimen previsto en la normativa local.

#### IV. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LA CONSULTA.

**PRIMERA.- ¿Pueden los Ayuntamientos renovar los acuerdos que tiene firmados con TELEFONICA desde antes que entrara la nueva Ley de telecomunicaciones, y firmar el nuevo acuerdo con CABITEL? o ¿deben sacar a concurso la instalación de las cabinas?**



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En contestación a las preguntas planteadas, cabe comentar las siguientes cuestiones:

### A. La posibilidad de renovar las autorizaciones otorgadas a TESAU:

Según se ha expuesto anteriormente, hasta la entrada en vigor de la actual legislación de telecomunicaciones, a los titulares de una licencia tipo B, como TESAU<sup>1</sup>, se les reconocía un derecho a ocupar el dominio público para la instalación de cabinas telefónicas, que ejercitaban mediante una solicitud de ocupación del dominio público ante la Administración titular del mismo, y que se concretaba en el otorgamiento de una autorización de uso.

Pues bien, dicho derecho de ocupación del dominio público, obtenido de conformidad con lo establecido en la legislación local, deberá ser respetado por la Administración titular hasta el vencimiento del plazo máximo de duración concedido para su ocupación, incluido las posibles prórrogas del mismo que se hayan podido prever en el título o normativa de aplicación, salvo que el mismo entre en conflicto con un interés público de carácter prevalente y que haya devenido incompatible.

### B. La posible transmisión a CABITEL de las autorizaciones previamente otorgadas a TESAU:

En cuanto a la transmisibilidad de las autorizaciones de uso del dominio público para la instalación de cabinas telefónicas, que en su momento fueron otorgadas a TESAU, habría que analizar la correspondiente normativa local vigente en ese momento.

Actualmente, en relación a esta cuestión, la regulación de la utilización de los bienes y derechos de dominio público local viene a regirse, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las Entidades Locales (en adelante, Reglamento de bienes):

“(…)

*A) por la legislación básica del Estado en materia de régimen local.*

*B) por la legislación básica del Estado reguladora del régimen jurídico de los bienes de las Administraciones Públicas.*

---

<sup>1</sup> A través del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, de 1 de agosto de 2003, se procedió a transformar el contrato concesional (Contrato regulador de la concesión para la prestación de los servicios finales y portadores entre la Administración el Estado y Telefónica de España, S.A., de 26 de diciembre de 1991) en una Licencia B1.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

*C) por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las comunidades autónomas.*

*D) en defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la legislación estatal no básica en materia de régimen local y bienes públicos.*

*E) por las ordenanzas propias de cada entidad.*

*F) supletoriamente por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos, administrativo y civil.*

*(...)"*

Pues bien, la legislación básica del Estado en materia de bienes de la Entidades Locales se encuentra regulada actualmente, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 33/2003), en la Disposición final segunda de la citada Ley, la cual establece en su apartado 5º que tendrá carácter de legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 149.1.18ª de la Constitución, entre otros, el artículo 91, apartado 4; artículo 92, apartados 1, 2 y 4; artículo 93, apartado 1, 2, 3 y 4; artículo 94; artículo 97; artículo 98; artículo 100; artículo 101, apartados 1, 3 y 4; artículo 102, apartado 2 y 3; y artículo 103, apartado 1 y 3, todos ellos referentes a las Autorizaciones y Concesiones demaniales.

Así, en cuanto a la transmisión de las autorizaciones sobre bienes de dominio público, el artículo 92.2 de la Ley 33/ 2003, viene a establecer la no transmisibilidad de las mismas para cuyo otorgamiento se tuvieron en cuenta circunstancias personales del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen admitan su transmisión.

Considerando que las autorizaciones para ocupar el dominio público para la instalación de cabinas telefónicas que TESAU obtuvo con arreglo a la legislación anterior, fueron otorgadas por ser titular de una licencia tipo B (condición particular necesaria para obtener dicha autorización), no es posible que dichas autorizaciones sean traspasadas a otro operador u empresa diferente al operador previamente autorizado, como es CABITEL, actualmente denominada TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, empresa filial del Grupo TELEFÓNICA distinta de TESAU.

Por tanto una vez extinguida la autorización otorgada a TESAU, como titular de una licencia tipo B, consecuencia del vencimiento del plazo de la misma, tanto



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

TESAU, como CABITEL<sup>2</sup>, al carecer actualmente ambos del derecho de ocupación al dominio público para la instalación de cabinas telefónicas, sólo podrán ocupar el dominio público para esta finalidad, previa concesión administrativa, de acuerdo a lo establecido en el apartado siguiente.

C. Sobre la posibilidad de los Ayuntamientos de sacar a concurso la instalación/explotación de las cabinas una vez vencido el plazo de las autorizaciones otorgadas a TESAU.

Conforme a lo dispuesto por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (en adelante Ley de Régimen Local), en su artículo 79, así como por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (en adelante Texto Refundido), en su artículo 74, y por el Reglamento de bienes, en sus artículos 2 y 3, el suelo municipal es un bien demanial afecto al uso público local que forma parte integrante del patrimonio de la autoridad municipal. En consecuencia, ésta resulta ser con carácter exclusivo la titular propietaria de dicho bien.

A resultas de esta titularidad, y en el marco general de competencias otorgadas por el artículo 25 de la Ley de Régimen Local, es también la autoridad municipal quien con el mismo carácter exclusivo gestiona, controla y regula el disfrute y aprovechamiento de la vía pública de la que es propietaria.

Así pues, en relación a la ocupación del suelo público local, el artículo 75 del Reglamento de bienes, establece que la ocupación del dominio público, de modo que limite o excluya su utilización por los demás interesados, se considera un uso privativo del dominio público municipal, y por ello, de acuerdo con el artículo 78 del citado reglamento, la ocupación de la vía pública para la instalación y explotación de teléfonos públicos de pago deberá acogerse al régimen general que regula el otorgamiento de concesión administrativa para el uso privativo del dominio público local, en el marco del correspondiente concurso público.

Por lo que respecta a la duración de las concesiones demaniales, el artículo 93.4 de la Ley 33/2003, establece que las mismas se otorgarán por tiempo determinado, y su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.

Aplicando la anterior normativa a la instalación de terminales de uso público en dominio público, las Administraciones Locales, como titulares del dominio

---

<sup>2</sup> Entidad, que tal y como se ha comprobado en el Registro de operadores dependiente de esta Comisión, es un operador dedicado únicamente al servicio de reventa del servicio telefónico disponible al público.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

público municipal, a la hora de organizar la distribución de los emplazamientos para la instalación/explotación de terminales de uso público en dominio público, deberán convocar concursos públicos, para el otorgamiento de la correspondiente concesión, celebrados con respeto a los principios de transparencia y no discriminación (vid. Art. 93.1 Ley Patrimonio de las Administraciones Públicas).

En consecuencia, habida cuenta la intrasmisibilidad de las autorizaciones de uso que actualmente ostenta TESAÚ, así como la normativa antes comentada, debe concluirse, que a fin de que CABISUR pueda lograr un título para ocupar el dominio público para la instalación de cabinas telefónicas, deberá solicitar la correspondiente concesión al Ayuntamiento donde pretenda instalar dichas cabinas.

Si bien, para finalizar procede señalar, que las Entidades Locales, como Administración Pública, deben servir con objetividad el interés general, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC).

Pues bien, la defensa de la libre competencia constituye un elemento de interés general que tiene por objeto la salvaguarda del orden público económico configurado por los artículos 33.2, 38, 128 y 131 de la Constitución española.

A este respecto ya señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia 88/1986 que *“el reconocimiento de una economía de mercado por la Constitución, y el compromiso de proteger el ejercicio de ésta – art. 38, inciso segundo- por parte de los poderes públicos suponen la necesidad de una actuación específicamente encaminada a defender tales objetivos constitucionales. Y una de las actuaciones que pueden resultar necesarias es la consistente en evitar aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la economía de mercado como es la concurrencia entre Empresas apareciendo así la defensa de la libre competencia como una necesaria defensa, y no como una restricción, de la libertad de Empresa y de la economía de mercado, que se verían amenazadas por el juego incontrolado de las tendencias naturales de éste.”*

Por ello, de conformidad con los principios establecidos en los artículos 3 y 4 de la LRJPAC, los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus propias competencias, deberán ponderar la totalidad de los intereses públicos implicados, entre los que se encuentra, la defensa de la libre competencia.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

De este modo, ha sido doctrina reiterada de esta Comisión<sup>3</sup>, que dada la estrecha vinculación entre el mercado de la prestación del servicio telefónico disponible al público a través de teléfonos públicos de pago y el de instalación y/o explotación de cabinas, la liberalización del mercado de las telecomunicaciones hace necesaria la eliminación de posibles barreras de entrada que impidan o dificulten el acceso a los mercados, no procediendo la concesión o mantenimiento de derechos exclusivos sobre el dominio público que impidan la existencia de la necesaria pluralidad de agentes económicos.

Pues bien, resultado directo de la doctrina expuesta, es que los Ayuntamientos deberán procurar en el otorgamiento de los títulos habilitantes para la ocupación del dominio público local para la instalación de cabinas telefónicas, que los mismos se concedan por el tiempo mínimo posible, de tal modo que permita la posibilidad de acceder al dominio público a todos los operadores y agentes interesados, y así promover, como interés general que es, la libre competencia en el mercado.

### **SEGUNDA.- La ampliación de instalación de cabinas en cualquier Ayuntamiento, ¿deben sacarlo a concurso?**

Esta cuestión ha sido contestada en las líneas que anteceden. La instalación, ampliación o renovación de terminales de uso público es una facultad de las Administraciones Locales, las cuales, a la hora de gestionar el uso del dominio público local, tendrán en cuenta, como Administración Pública que deben servir con objetividad el interés general, de acuerdo con la LRJPAC, la defensa de la libre competencia.

Así, la petición de acceder al dominio público para la instalación de cabinas telefónicas, tanto por operadores que exploten o no una red pública de comunicaciones electrónicas, así como por otros agentes, se resolverá mediante el otorgamiento de una concesión administrativa previa convocatoria de un concurso público celebrado con respeto a los principios de contradicción, transparencia y publicidad y a los objetivos de promoción de las condiciones de competencia efectiva.

### **TERCERA.- Nosotros como empresa ¿podemos dirigirlos a los Ayuntamientos para que estos nos informen cuando termina el acuerdo con Telefónica o con cualquier empresa? Si es afirmativo, basándonos en que ley.**

<sup>3</sup> Resoluciones de 15 de julio de 1999 y 23 de marzo de 2000.



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El artículo 105.1 de la Constitución Española (en adelante, CE), reconoce el derecho de acceso a los ciudadanos, y así establece que:

*“La ley regulará:*

*(...)*

*b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.*

*(...).”*

Conforme a lo establecido en la CE, la LRJPAC, en su artículo 37.1 regula el derecho de acceso a archivos y registros de las Administraciones públicas en los siguientes términos:

*“Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de solicitud.”*

Por lo que se refiere, en concreto, a las Entidades locales, el artículo 18.1.e de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL), establece como derechos de los vecinos el ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.

Sin embargo, el artículo 70 LBRL, incardinado en el Título V LBRL, de "Disposiciones comunes a las entidades locales", amplía el ámbito subjetivo y reconoce el derecho de todos los ciudadanos *“a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada.”*

Pues bien, como se puede observar de los preceptos citados, tanto el texto constitucional como la LRJPAC y LBRL reconocen el derecho de acceso y consulta a los ciudadanos, si bien en dicho concepto debe entenderse incluidas



## COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

también las personas jurídicas, pues como ha señalado el Tribunal Constitucional en sentencia STC 53/1983, en relación con la legitimidad para recurrir en amparo de acuerdo con el artículo 53.2 de la CE, precepto que en concreto alude también a la expresión “*cualquier ciudadano*”:

*“La referencia que hace el artículo 53.2 de la CE a «cualquier ciudadano» como sujeto que puede recabar la tutela de las libertades y derechos a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y las notas que para algunos tipifican el concepto de ciudadano, no debe llevarnos a negar a las personas jurídicas, y entre ellas a las Sociedades mercantiles, como es aquí la actora, el que frente a una eventual violación del derecho que proclama el artículo 24.1 de la CE puedan acudir al proceso de amparo.”*

Por tanto, con arreglo a lo expuesto, no hay problema en entender que la entidad CABISUR, como persona jurídica, pueda acceder a los archivos y registros administrativos y de este modo obtener información sobre la duración de los acuerdos firmados por los Ayuntamientos en materia de instalación/explotación de teléfonos públicos de pago con cualquier operador.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

EL SECRETARIO

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Jaime Almenar Berenguer

Reinaldo Rodríguez Illera